

Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que la abogada Carmen Gloria Castro Galarce, en representación de doña Lilian Contreras González, demandante en autos sobre tutela de derechos fundamentales y despido injustificado, caratulados “Contreras con Asociación Chilena de Municipalidades”, Rit T-187-2024, seguidos ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, dedujo recurso de queja en contra de los ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad, señora Verónica Sabaj, señor Guillermo Córdova (s) y la fiscal judicial señora Ana María Hernández, porque -a su parecer- dictaron con falta y abuso grave la sentencia de 27 de marzo de 2024, que confirmó la pronunciada por el tribunal de primer grado que declaró la caducidad de la acción de tutela laboral, despido injustificado, recargo legal e indemnización prevista en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo.

Explica que la falta o abuso grave se configura al infringirse lo previsto en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo, cuando prescribe que no podrá recurrirse al tribunal, transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador, el carácter protector del derecho del trabajo, los principios que lo rigen, en particular el in dubio pro operario y la regla de la norma más conveniente, en coherencia con el principio de tutela judicial efectiva, derivado del principio rector del debido proceso, pues la denuncia se presentó el día ochenta y ocho de la separación de la trabajadora, por lo tanto, dentro del plazo máximo legal de noventa días hábiles, por lo que al declararse la caducidad de las acciones, se desatendió el tenor literal de la norma señalada.

Indica que si una norma admite diversas interpretaciones, el juez debe preferir aquella que sea más conveniente para el trabajador o trabajadora, lo que ha sido reconocido por la jurisprudencia en materia laboral, toda vez que las normas procesales debe ser interpretadas según los principios que rigen esta rama del derecho y el procedimiento tutelar de derechos fundamentales.

Concluye expresando que, con lo anterior, se le privó del derecho de reclamar ante la sede jurisdiccional competente en un procedimiento en el que pueda acreditar su pretensión y obtener un pronunciamiento acerca del derecho dubitado.

Solicita, en definitiva, tener por interpuesto recurso de queja en contra de los recurridos ya individualizados, quienes dictaron la sentencia definitiva de segunda instancia con falta o abuso, acogerlo, e invalidándola, se dicte una de reemplazo que revoque la resolución dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, y que de curso a la denuncia por vulneración de



derechos fundamentales y a la acción por despido injustificado y cobro de prestaciones.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente por resolución de 27 de marzo de 2024, confirmaron la de primer grado que declaró la caducidad de la acción de tutela laboral, despido injustificado, del recargo legal y de la indemnización prevista en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, puesto que se ajusta a derecho por los motivos que expresa, la que se encuentra fundamentada, teniendo presente que el 30 de septiembre de 2023 se despidió a la trabajadora, el 5 de diciembre del mismo año interpuso reclamo administrativo ante la Dirección del Trabajo, luego, el 9 de enero de 2024 se realizó el comparendo y el 19 del mismo mes se dedujo la demanda, por lo que al interponerse se encontraba vencido el término de sesenta días que se tiene para deducirla, ya que el reclamo administrativo se presentó el cincuenta y dos día hábil desde la fecha de la separación de funciones, reanudándose el computo del plazo el 9 de enero de 2024 con la realización del comparendo, y la demanda se dedujo el 19 del mismo mes, esto es, en el día sesenta y uno hábil, evidenciándose la caducidad dispuesta por la jueza *a quo*.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que la magistratura recurrida -al decidir como lo hizo- haya incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte.

En efecto, consta tanto de las alegaciones de la recurrente, el informe de los recurridos y de los antecedentes de la causa, que la demanda se interpuso el día 19 de enero de 2024, en relación al despido de fecha 30 de septiembre de 2023, que la parte califica de vulneratorio de derechos fundamentales, advirtiéndose, asimismo, que dedujo un reclamo ante la Inspección del Trabajo el día 5 de diciembre del mismo año, siendo citada la trabajadora a un comparendo que se celebró el día 9 de enero de 2024. Por otra parte, la denuncia planteada es aquella prevista en el artículo 489 del Código del Trabajo, cuyo inciso segundo prevé que "La denuncia deberá interponerse dentro del plazo de sesenta días contado desde la separación, el que se suspenderá en la forma a que se refiere el



inciso final del artículo 168”, que, a su vez, permite suspender el plazo cuando “dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección”.

De lo anterior, se deduce que el plazo debía computarse entre el día siguiente al despido y aquél en que se interpuso la demanda, considerando su suspensión entre los días 5 de diciembre de 2023 y 9 de enero de 2024, lo que, efectivamente arroja que la parte accionó fuera del plazo establecido en la legislación, y, por tanto, los recurridos para confirmar la resolución apelada analizaron el tenor de la preceptiva pertinente, concluyendo que la judicatura *a quo* resolvió de manera correcta al así declararlo; proceso racional que, obviamente, implica analizar e interpretar las disposiciones que rigen el caso concreto, lo que importa precisamente el ejercicio de las facultades privativas propias de la función judicial.

Sexto: Que, en ese contexto, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los tribunales de justicia en cumplimiento de su cometido, no es susceptible de ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de éstos, a menos que en dicho proceso se advierta, de forma manifiesta, un razonamiento abusivo o que atente contra las reglas del buen uso de la razón en la construcción de los argumentos interpretativos, lo que no se verifica en la especie.

Séptimo: Que lo precedentemente razonado resulta suficiente para concluir que el presente arbitrio debe ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se **rechaza** el recurso de queja deducido por la abogada Carmen Gloria Castro Galarce en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acordada con el voto en contra del **ministro Sr. Llanos** y de la **abogada integrante Sra. Rojas**, quienes estuvieron por acoger el recurso de queja y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución dictada por los jueces de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha veintisiete de marzo del año en curso, que confirmó la sentencia de veintiséis de enero último que declaró la caducidad de las acciones de tutela laboral, despido injustificado, recargo legal e indemnización prevista en el inciso tercero del artículo 489 del Código del Trabajo, disponiendo, en su lugar, que fue interpuesta dentro del término legal, ordenándose que el tribunal *a quo* debe dar curso a la demanda y a la prosecución del procedimiento



por el juez no inhabilitado que corresponda, teniendo para ello presente las siguientes argumentaciones:

1) Que es necesario tener en consideración que el procedimiento de tutela laboral se encuentra regulado en el párrafo 6° del Título I del Libro V del Código del Trabajo, que se emplea respecto de las cuestiones suscitadas por la aplicación de las normas laborales, cuando los derechos fundamentales que expresamente se mencionan, resultan afectados por actos imputables al empleador, tanto durante la ejecución del contrato de trabajo como respecto de su término.

Según lo dispone el inciso 3° del artículo 485 del cuerpo legal en referencia, *“se entenderá que los derechos y garantías a que se refieren los incisos anteriores resultan lesionados cuando el ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador limita el pleno ejercicio de aquéllas sin justificación suficiente, en forma arbitraria o desproporcionada, o sin respeto a su contenido esencial”*.

2) Que, de lo antes expuesto, se desprende que la labor de la judicatura en dicho procedimiento es esencial, toda vez que debe ponderar entre los derechos fundamentales del trabajador y las facultades del empleador, debiendo considerar, para estos efectos, lo dispuesto en el artículo 5 del Código del Trabajo, que limita el ejercicio de las que la ley le reconoce a este último al respeto de las garantías constitucionales del trabajador, de donde se deriva el carácter protector del derecho del trabajo en general y del procedimiento de tutela en particular.

3) Que, a su turno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 486 del Código del Trabajo, cualquier trabajador u organización sindical puede requerir la tutela de los derechos fundamentales que estime lesionados en el ámbito de las relaciones jurídicas de naturaleza laboral.

Ahora bien, cuando la vulneración haya ocurrido durante la relación laboral, la acción pertinente deberá interponerse dentro de sesenta días contados desde que se produzca.

En cambio, si aquella transgresión tiene lugar con ocasión del despido, la denuncia debe deducirse en el mismo plazo, pero contado desde la separación respectiva, efectuando, en su inciso final, un reenvío a la regla del artículo 168 del estatuto laboral, haciendo aplicable, en la especie, la regla de excepción relativa a la posibilidad de suspensión de tal plazo.

4) Que, en efecto, el artículo 168 señala en su último inciso, que *“el plazo contemplado en el inciso primero se suspenderá cuando, dentro de éste, el trabajador interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva. Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante, lo anterior, en ningún*



caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”

5) Que para determinar el correcto alcance de dicha normativa, es menester recordar que, en materia laboral, las normas procesales deben ser comprendidas integrando de manera concreta los principios inspiradores que justifican la existencia de tal disciplina, presidida, especialmente, por el principio tuitivo o protector, y que uno de los basamentos más sensibles en este ámbito, se vincula con el derecho de las personas a acceder libremente a un tribunal de justicia para la protección de sus derechos, en cuanto consecuencia evidente del reconocimiento constitucional de lo que la doctrina y el derecho convencional y comparado denomina como derecho a la tutela judicial efectiva, de especial relevancia en el contexto de la protección del derecho de los trabajadores.

Tal concepto se alza como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, garantizado expresamente por nuestra Carta Fundamental en el numeral 3º de su artículo 19, que reconoce la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento, garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

6) Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26º del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que, dado su rol protector, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.

7) Que, de esta manera, una interpretación armónica de los preceptos y elementos mencionados, como asimismo, del principio *in dubio pro operario*, permite concluir que el artículo 168 ya citado contiene una regla especial, mediante la cual el plazo para deducir las acciones a que se refiere, como también la de tutela laboral por infracción de derechos fundamentales, se sujeta a la posibilidad de suspensión de su cómputo, en la medida que intervenga reclamo



administrativo, lo que provoca, en los hechos, la extensión de dicho término, sin poder sobrepasar los noventa días hábiles.

8) Que lo anterior se ve reforzado con el propio tenor literal de la disposición, toda vez que al finalizar el inciso final del mencionado artículo 168 del Código del Trabajo, ocupa la expresión “No obstante lo anterior,...”, denotativo de oposición o diferencia, que se traduce que si se reclama administrativamente, el señalado plazo se extiende hasta los noventa días hábiles contados desde el término de la relación laboral.

Regístrese y archívese.

Nº 12.456-2024.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Leopoldo Llanos S y las Abogadas Integrantes señoras Fabiola Lathrop G., e Irene Rojas M. No firma el ministro señor Llanos y la abogada integrante señora Rojas, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal el primero y por estar ausente la segunda. Santiago, nueve de julio de dos mil veinticuatro.



En Santiago, a nueve de julio de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

